



La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, el que los operadores de red móvil faciliten a los prestadores de servicios de tarificación adicional relacionados con el envío de mensajes sms los datos necesarios para la identificación de aquellos abonados que no hubieran satisfecho el importe de los citados mensajes, especificando que tales datos serían los de nombre y apellidos o, en su caso, denominación social del abonado, su domicilio, su NIF ó CIF, el número de teléfono desde el que se remitió el sms, el número de mensajes impagados y la cantidad impagada y la fecha y hora de cada uno de esos mensajes.

Argumenta la consulta que en caso de impago el operador de red móvil deduce el importe de los mensajes no satisfechos por el usuario en su integridad, pechando el operador de almacenamiento y reenvío, prestador del servicio de tarificación adicional, con el importe total impagado, siendo necesario que el mismo obtenga la información referida al incumplidos a fin de poder reclamar en vía judicial o extrajudicial el abono de la deuda no satisfecha.

Teniendo en cuenta estos precedentes el supuesto ahora planteado guarda similitud con el que fue objeto de informe de esta Agencia en fecha 28 de octubre de 2002, referido a una consulta planteada por la ahora igualmente consultante y que se adjunta como Documento 2 a la consulta planteada. En dicho informe se analizaba “si resulta conforme a las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la comunicación a los prestadores de servicios de tarificación adicional de los datos personales de los usuarios de dichos servicios en los casos en que el impago por parte de dichos usuarios es repercutido por el operador al propio prestador, en virtud de las cláusulas contenidas en los contratos tipo para la prestación de servicios de tarificación adicional soportados en el servicio telefónico básico a través del prefijo 906”.

Esta misma situación se produce en el caso ahora planteado, a la vista de los modelos de condiciones generales de contratación aportadas por la consultante, en que se prevé expresamente la repercusión por el operador de red móvil en caso de impago, bien mediante el establecimiento de

procedimientos de estimación, bien mediante la detracción directa de la cantidad insatisfecha.

En particular, en uno de los contratos aportados se señala que el impago por el usuario de las cantidades correspondientes al importe de los servicios será asumido por el prestador, teniendo el operador derecho a descontar a dicho prestador el importe de dichos impagos en el momento de efectuar el pago mensual correspondiente. En dicha cláusula igualmente se señala que si se produjese el pago la cantidad será reintegrada al prestador de servicios en la siguiente retribución mensual.

También debe destacarse que en alguno de los contratos se señala que a los efectos de que el prestador pueda continuar realizando la gestión de cobro, dicho operador le facilitará, “siempre que éste lo solicite, la identidad de los clientes que hayan impagado los servicios de tarificación adicional”, siempre que el operador disponga de dicha información y con respeto a la normativa de protección de datos.

En el ya mencionado informe de 28 de octubre de 2002 se reproducía, a su vez, el informe emitido por la Agencia en fecha 24 de julio de 2002, en que se señalaba que:

*“(...) en cuanto a la cesión de los datos al prestador de servicios que contrata la línea 906, puede indicarse que la misma tendría cobertura, según se ha apuntado ya, en el artículo 11. 2 c), por cuanto el usuario que contacta para obtener dichos servicios está asumiendo la relación comercial que implica dicha llamada, con un coste adicional que se destina efectivamente al pago de las prestaciones que recibe, debiendo conocer las consecuencias que pueden derivar del impago de las mismas conforme al ordenamiento jurídico, y así, conforme al artículo 1124 del Código civil, la facultad de la otra parte de exigir el cumplimiento. Tal reclamación, y la cesión y tratamiento de los datos que es precisa para la misma, puede considerarse desarrollo necesario de una relación jurídica libre y legítimamente aceptada. Por otro lado, y de no permitirse la misma, se produciría un perjuicio patrimonial a la otra parte, que estaría obligada a pagar los costes al operador de telecomunicaciones, en el sistema establecido por la CMT, a través de los que presta sus servicios.”*

Y se concluía en dicho informe lo siguiente:

*“En consecuencia, dado que la utilización del servicio supone la libre aceptación de una relación jurídica del usuario con el operador y con el propio prestador del servicio que exige, para su adecuado cumplimiento, la comunicación de los datos del usuario en caso de impago, so pena de imputar a la prestadora del servicio una carga que no tiene la obligación legal de soportar, entendemos que la comunicación se encontraría amparada por el artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999.”*

Quiere con todo ello, concluirse que, en línea con lo sustentado en aquel anterior informe de esta Agencia, la cesión por parte del operador de red móvil al prestador de servicios de tarificación adicional de los datos necesarios para el cobro de las cantidades impagadas, y deducidas por el operador al prestador como consecuencia de las cláusulas contractuales tipo a las que se ha hecho referencia se encuentra amparada en la relación jurídica entablada por el abonado deudor con el propio prestador del servicio a través del operador de red, de forma que el prestado tiene derecho a poder reclamar la contraprestación exigible como consecuencia de la prestación del servicio de orificación adicional y para ello acceder a los datos necesarios para reclamar el abono de dichas cuantías cuando las mismas no hubieran sido satisfechas al operador de red móvil y éste las hubiera deducido y repercutido al prestador.

El problema se centra entonces en determinar el alcance de la información que habrá de ser suministrada al prestador de servicios y a tal efecto debe en particular tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”. Es decir, el prestador no deberá acceder, y en consecuencia tratar, más datos que los necesarios para el fin que legitima su tratamiento.

Debe en este punto recordarse igualmente que el principio de proporcionalidad, junto con el de finalidad, aparece expresamente previsto en caso de que el tratamiento se deba a la existencia de una cesión necesaria para el adecuado desarrollo, cumplimiento y control de una relación jurídica, al especificar taxativamente el artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999 que “en este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique”, lo que afecta tanto a la finalidad para la que el cesionario podrá tratar los datos como a la necesidad de que los datos sea adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con dicha finalidad.

Pues bien, aplicando la mencionada regla de proporcionalidad al supuesto que nos ocupa, parece lógico entender que el prestador de servicios de tarificación adicional deberá poder acceder a la información que resulte necesaria para acreditar la certeza de la deuda y de su incumplimiento y la identidad de la persona física o jurídica autora del mencionado incumplimiento, debiendo el operador de red facilitar esa información siempre que la misma se halle en su poder, tal y como señala uno de los contratos aportados junto con la consulta.

La primera de las informaciones a las que se hace referencia exigirá que el operador facilite al prestador los datos relacionados con el efectivo incumplimiento producido, especificando los servicios que no hubieran sido satisfechos, lo que incluiría el desglose de los mensajes a los que se refieran los impagos, con indicación del momento en que se realizaron y la cantidad impagada, así como el número telefónico desde el que se produjo la remisión del mensaje impagado.

En cuanto a la segunda de las informaciones citadas, el operador debería suministrar al prestador la información que permitiese a aquél actuar contra el incumplidor, siendo preciso recordar que en este caso se habrá producido ya la correspondiente detracción del impago producido que habrá sido repercutido por el operador al prestador.

De este modo, el operador debería suministrar al prestador aquella información que permitiese individualizar al incumplidos y que el propio operador debería emplear en caso de tener que dirigir directamente contra el la acción para lograr el pago del servicio.

En este punto, resulta relevante la cita efectuada en la consulta del artículo 399.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo preciso que por parte del demandante se identifique claramente al demandado y el domicilio o residencia en que aquél pueda ser emplazado.

Teniendo en cuenta dicho precepto, cabe considerar que la solicitud por el prestador del dato referido al nombre y apellidos, o en su caso denominación social, del incumplidor así como de su domicilio, resulta proporcional a la finalidad que justifica la solicitud, cual es el logro del pago insatisfecho.

En consecuencia, se considera que la comunicación por el operador de red móvil al prestador de servicios de tarificación adicional de los datos a los que se refiere la consulta se encuentra amparada por lo dispuesto en el artículo



11.2 c) de la Ley Orgánica, resultando dicha información adecuada a la finalidad que la justifica, procediendo dicha cesión siempre que la información solicitada se encuentre disponible para el operador.

En todo caso, debe recordarse que el prestador únicamente podrá emplear los datos para la mencionada finalidad, dado que como se indicó el artículo 11.2 c) de la Ley orgánica 15/1999 establece que “en este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique”